

Buin, dieciocho de abril de dos mil veintidós.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el 18 de diciembre de 2021, compareció don **Carlos Agustín Acevedo Gajardo**, cesante, domiciliado en Pasaje uno, casa 73, población Baquedano, Comuna de Paine, quien interpuso denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, derivada de actos de discriminación laboral, con ocasión del despido, en contra de la **Ilustre Municipalidad de Paine**, persona jurídica de Derecho Público, representada legalmente por su alcalde don Rodrigo Alexander Contreras Gutiérrez, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en Avenida General Baquedano N°490, Comuna de Paine, solicitando que la misma sea admitida a tramitación y en definitiva acogida en todas sus partes, en virtud de los argumentos de hecho y de derecho que expuso en su libelo.

Expuso que comenzó a prestar servicios personales bajo vínculo de subordinación y dependencia, en los términos señalados en el artículo 7° del Código del trabajo, en favor de su ex empleador, el 2 de enero de 2009, desempeñándose como jardinero en las dependencias de la misma municipalidad, ubicadas en calle Avenida General Baquedano N°490, labor que comprendía el manejo de las áreas verdes de la municipalidad, riego, tala y mantención de árboles, corte de pasto, etc., labores que cumplió bajo el mando directo del señor alcalde don Diego Vergara, y de la directora de aseo y ornato de la municipalidad doña Rosario de Larderel. Dichas labores las desempeñaba en una jornada ordinaria de trabajo, conforme lo establece el artículo 22 del Código del Trabajo, ejecutándolas de lunes a viernes, desde las 8:30 horas hasta las 17:30 horas, con una hora de colación, la cual era desde las 14:00 horas hasta las 15:00 horas. Por dicha labor, percibía una remuneración ascendente a \$391.668.

En ese escenario, destaca que desde que comenzó a trabajar para la municipalidad, siempre desempeñó sus funciones en forma profesional y atenta, jamás recibió un reclamo de sus superiores, ni menos recibió reclamos de otros trabajadores respecto a cómo hacía su trabajo, manteniendo las áreas verdes de la municipalidad impecables, siendo siempre felicitado por el alcalde don Diego Vergara, y siempre siendo reconocido por su trabajado por todos los demás trabajadores del municipio. Esta situación solo se alteró con la llegada de la pandemia mundial que explotó el año 2019 por el Covid 19, que provocó que se declarara estado de catástrofe en el territorio nacional, en atención a la letalidad y peligro del nuevo virus. Producto de dicha contingencia, el municipio adoptó una política de protección de sus trabajadores de mayor edad, ordenándole quedarse en su hogar como medida de protección, con goce de sueldo, a partir de 2020, y solo debía concurrir en las quincenas o veinte de cada mes al municipio, a firmar la boleta respectiva para que se procediera a pagar su sueldo. Pasado los meses, y en atención a que quería volver al trabajo, se reunió en varias ocasiones con el alcalde don Diego Vergara a fin de coordinar su regreso, quien le manifestaba que no



XJEYYZX5

se preocupara, que se le seguirá pagando el sueldo, y que volvieran a hablar en diciembre de 2020, ya que él creía que para esa época estaría superada la crisis sanitaria, y habría menos riesgo de volver a su trabajo. Llegado diciembre de 2020, concurrió a la oficina del alcalde, quien le indicó que esperaran un poco más para su regreso, haciendo notar que el último contrato que le hicieron firmar en la municipalidad vencía precisamente en diciembre, a lo que él manifestó que no se preocupara, que le harían un nuevo contrato para que trabajara 6 meses más, y que comenzaría en enero, debiendo volver a principios de enero de 2021. Ya en enero y siguiendo las directrices que le había dado el alcalde, se dirigió a la municipalidad momento en que le dicen las secretarías de aseo y ornato que no podía firmar la boleta de enero, porque no había boleta que firmar, ya que se había terminado su contrato.

Producto de esta situación, le dijeron que hablara con la directoria de Aseo y ornato, doña Rosario de Larderel, la cual se sorprende al verlo y le ratifica que no continuaría prestando servicios en la municipalidad en atención a que por su edad de 75 años, ya estaba muy mayor para seguir trabajando con ellos, siendo necesario que se prescindiera de sus servicios. Ante esta respuesta negativa, concurrió a hablar con el alcalde quien solo le indicó que lo mío debía verlo con doña Rosario, y que si ella le decía que no podía seguir trabajando por su edad, eso era la decisión que había tomado la municipalidad para con él, prometiéndole que apenas hubiera un cupo le avisaría para que volviera al trabajo, lo que jamás ocurrió.

Agregó que esta situación provocó un malestar en su persona, con constantes mareos, dolores estomacales, los que eran provocados por un síndrome de ansiedad derivado de su despido, el que fue diagnosticado por su médico tratante.

Teniendo presente lo precedentemente descrito, entiende el actor que existen los siguientes indicios de las vulneraciones que denunció en su libelo, consistente el primer indicio en las boletas de honorarios, ya que las mismas corresponden al periodo comprendido entre enero de 2020 y diciembre de 2020, quedando patente que durante ese periodo prestó servicios de forma ininterrumpida para su empleador. Asimismo, como segundo indicio, consta en la copia de carnet del denunciante que nació el 11 de noviembre de 1945, y que por lo tanto a la fecha de su despido discriminatorio, tenía 75 años, lo que es un indicio claro de la denuncia efectuada; como tercer indicio acompañó certificado de diagnóstico médico, que da cuenta de los efectos lesivos en su persona que tuvo la forma discriminatoria en que lo despidieron; como cuarto indicio, fue reemplazado en sus funciones por una persona mucho más joven, quien era nuevo en el municipio, y que al poco tiempo de su despido asumió sus mismas funciones en la municipalidad, y cuya identidad corresponde a la de don Ángel Reyes Reyes, quien solo tiene 31 años de edad, y fue contratado a honorarios al igual como ocurrió conmigo cuando entre a trabajar a la municipalidad.



XJEY YZXS

En ese sentido, entendió que la relación que la unía con la demandada es de carácter laboral, en virtud del principio de realidad, existiendo un abuso por parte de la demandada de la contratación a honorarios a fin de disfrazar el vínculo que las unía. En ese sentido, la prestación de servicios realizada forma parte de labores permanentes del Departamento de Aseo y Ornato de la municipalidad, función propia y permanente del Municipio, sin ajustarse la misma tampoco a la de cometidos específicos, dado que las labores desarrolladas corresponden a propias de naturaleza de la institución, siendo desarrolladas de manera permanente por la misma. Así, la naturaleza de las labores desempeñadas, su período de extensión, sus renovaciones y la propia orgánica del desempeño de las mismas, no dan cuenta de las características de contratos a honorarios con la que la ley faculta a la Municipalidad, pues, no se le contrató en virtud de alguna calidad profesional o técnica de educación superior, o de experto en alguna determinada materia, tampoco para la realización de labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad, y por último, tampoco se le contrató para la realización de algún cometido específico dada la naturaleza permanente y principal de las labores desempeñadas a favor del departamento de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Paine, únicas formas permitidas legalmente para la contratación a honorarios.

Posteriormente, agregó que la discriminación laboral que sufrió, que ocasionó su despido, atenta contra su derecho a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Así, el despido producto de la edad que tiene le provocó una profunda decepción, pues mediante el trabajo que desarrollaba para la municipalidad, se sentía parte activa y útil de la pequeña comunidad que es la comuna de Paine, y además le permitía mantenerme activo a sus 75 años, con responsabilidades propias de alguien que no está esperando la pronta llegada del fin de sus días. Sin embargo, más importante aún, consiste en que su trabajo, y la contraprestación que le correspondía, sin perjuicio de ser baja y muy cercana al mínimo, le permitía subsistir, modesta y humildemente con su familia, de tal forma que al perder su trabajo, su desesperación, sentimiento de injusticia, e incertidumbre respecto de su futuro, se transformaron en angustia, lo que provocó en su persona que somatizara esto, manifestándose en mareos o sensación de vértigo y dolores estomacales, los que fueron diagnosticados como síndrome de ansiedad. Así, la discriminación, con el consecuencial acto vulneratorio, se produce con ocasión del despido ya que fue despedido por el único motivo de tener 75 años de edad, sin posibilidad alguna de poder prever y detener la discriminación ya denunciada, la cual conllevó a su despido en último término, y provocaron durante su consumación alteraciones en su estado de salud, tanto física como mental, tal como ya se ha explicado, lo que implica solicitar la indemnización por daño moral que consta en el petitorio.

Respecto al no pago de cotizaciones y la nulidad del despido, su ex empleadora jamás, desde el inicio de la relación contractual, pagó cotización previsional alguna a su favor en la entidades respectivas, por lo que si se declara por este tribunal que el vínculo



entre las partes es de naturaleza laboral, la demandada adeuda todas las cotizaciones de seguridad social correspondientes a cotizaciones previsionales del Fondo de Pensiones, Fondo de Salud y del Fondo de Cesantía, por todo el período trabajado entre el día 02 de enero de 2009 hasta el 15 de enero del año 2021. Así, corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones y condenar a su pago, para lo cual se debe ordenar oficiar a las entidades previsionales respectivas a objeto que inicien los trámites de cobranza judicial, aplicando asimismo la sanción contemplada en el artículo 162 inciso 5° y siguientes del Código del Trabajo.

Respecto a las prestaciones adeudadas, expuso que se le adeuda el feriado legal por \$3.107.233; compensación por uso y desgaste de herramientas ya que durante los casi 12 años que trabajó para la demandada, no se le hizo entrega de ningún tipo de herramientas para el desempeño de sus labores, como implementos para poda o limpieza de malezas, o corte de pasto, por lo que todo lo que se ha hecho en el recinto, ha sido con sus propias herramientas, ante lo cual se le adeuda la suma de \$2.000.000 por dicho concepto y; 15 días trabajados del mes de enero 2021, correspondiente a la suma de \$195.834.

Finalmente, y en base a los hechos ya indicados, solicitó: 1. Que, se declare que existió una relación laboral entre el actor y la demandada desde el 2 de enero de 2009, hasta la fecha en que se concretó su despido verbal y discriminatorio, es decir, el 15 de enero de 2021, o en subsidio hasta la fecha que este tribunal estime conforme a derecho; 2. Que, el monto de la última remuneración mensual devengada por el actor asciende a la suma de \$391.668, y que esta debe ser la base de cálculo de las indemnizaciones legales por termino de contrato, así como también de la indemnización adicional demandada, o en subsidio, la que resulte procedente conforme a derecho; 3. Que, en base a la denuncia deducida, se declare que su despido ha sido discriminatorio por su edad, lo que ha afectado sus derechos fundamentales, en específico la integridad física y psíquica, con motivo del término de la relación laboral por despido, y consecuentemente condenarla a pagar las indemnizaciones dispuestas por ley para este tipo de conductas lesivas; 4. Que, como consecuencia de la declaración anterior y, de conformidad con el artículo 489 inciso 3° del Código del Trabajo, se ordene el pago de la indemnización especial de tutela por el monto equivalente a once remuneraciones por un total de \$4.308.348 o la cantidad que este tribunal determine, la que en todo caso no podrá ser inferior a seis remuneraciones; Que, se declare que el contrato de trabajo que lo vinculó con su ex empleadora, ha terminado con fecha 15 de enero de 2021, o en la fecha que este tribunal establezca, ordenando el pago consecuencial de las siguientes prestaciones laborales por termino de contrato: a) Indemnización sustitutiva de aviso previo del artículo 162 del Código del Trabajo por \$391.668; b) Asimismo condene a la indemnización por años de servicio del artículo 163 inciso segundo del Código del Trabajo, de \$4.308.348; c) Además, siendo su indemnización por años de servicio de \$4.308.348, corresponde aplicar un recargo legal



en atención a lo establecido en el artículo 168 letra B del Código del Trabajo de un 50% ascendiente a \$2.154.174; 6. Que declare que la demandada debe pagar las siguientes prestaciones laborales adeudadas: a) Feriado Legal por \$3.107.233; b) Compensación o indemnización por el uso y desgaste de sus herramientas, en labores propias de la Municipalidad de Paine, por la suma de \$2.000.000; c) 15 días de remuneración del mes de enero de 2021, por \$195.834; 7. Condenar a la demandada al pago de la suma de \$5.000.000, por concepto de daño moral sufrido por el actor, por el acto discriminatorio sufrido con ocasión de su despido, o lo que este tribunal determine; 8. Que se declare que el despido del que fue objeto es nulo y sin valor, conforme a lo prescrito por el artículo 162 del Código del Trabajo, condenando a su ex empleador a pagar su remuneración y cotizaciones de seguridad social hasta la convalidación de su despido; 9. Todo esto con reajustes e intereses; 10. La expresa condena de la contraria respecto de las costas y; 11. Que, en conformidad a lo prescrito en el artículo 495 inciso final del Código del Trabajo, se remita copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro y publicación.

Asimismo, en el primer otrosí de su presentación, dedujo demanda subsidiaria de despido injustificado, indemnizaciones, recargos y cobro de prestaciones, en contra de la demandada reiterando los hechos ya descritos precedentemente, solicitando que: 1. Que se declare que existió una relación laboral entre su persona y la demandada Ilustre Municipalidad de Paine, que se extendió desde el desde el 02 de enero de 2009, hasta la fecha en que se concretó su despido verbal y discriminatorio, es decir, el 15 de enero de 2021, o en subsidio hasta la fecha que este tribunal estime conforme a derecho; 2. Que el monto de la última remuneración mensual devengada por el actor asciende a la suma de \$391.668, y que esta debe ser la base de cálculo de las indemnizaciones legales por termino de contrato, o en subsidio, la que resulte procedente conforme a derecho; 3. Que se declare que el contrato de trabajo que lo vínculo con su empleadora ha terminado con fecha 15 de enero de 2021, o en la fecha que este tribunal lo establezca, ordenando el pago consecuencial de las siguientes prestaciones laborales por termino de contrato: a) Indemnización sustitutiva de aviso previo del artículo 162 del Código del Trabajo por \$391.668; b) Asimismo condene a la indemnización por años de servicio del artículo 163 inciso segundo del Código del Trabajo, de \$4.308.348; c) Además, siendo su indemnización por años de servicio de \$4.050.522, corresponde aplicar un recargo legal en atención a lo establecido en el artículo 168 letra b del Código del Trabajo de un 50% ascendiente a \$2.154.174.-, o la suma que este tribunal determine por este concepto conforme a derecho; 4. Que declare que la demandada debe pagar las siguientes prestaciones laborales adeudadas: a) Feriado Legal por \$3.107.233, o la suma que este tribunal determine por este concepto; b) Compensación o indemnización por el uso y desgaste de sus herramientas, en labores propias de la Municipalidad de Paine, por la suma de \$2.000.000, o la suma que este tribunal estime prudente fijar; c) 15 días de



remuneración del mes de enero de 2021, por \$195.834; 5. Condenar a la demandada al pago de la suma de \$5.000.000, por concepto de daño moral sufrido por el actor, causado por el despido injustificado del cual fue objeto, o las sumas menores o mayores que este tribunal señale por este concepto; 6. Que se declare que el despido del que fue objeto es nulo y sin valor, conforme a lo prescrito por el artículo 162 del Código del Trabajo, condenando a su empleador a pagar su remuneración y cotizaciones de seguridad social hasta la convalidación de su despido; 7. Las sumas demandadas y que ordene pagar este tribunal deben ser reajustadas, a las que se les debe aplicar el interés máximo permitido para operaciones reajustables, según lo dispone el artículo 63 y 173 del Código del Trabajo y; 8. La expresa y ejemplificadora condena de la contraria respecto de las costas.

SEGUNDO: Que, en tiempo y forma, contestó el libelo pretensor don Rodrigo Contreras Gutiérrez, abogado, en su calidad de Alcalde y en representación de la **Ilustre Municipalidad de Paine**, Corporación Autónoma de Derecho Público, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Baquedano N°490, comuna de Paine, quien contestó la denuncia deducida solicitando sea rechazada en todas sus partes y con expresa condenación en costas, en base a los argumentos expuestos en su libelo.

En primer término, la parte denunciada dedujo la excepción de incompetencia toda vez que conforme a los antecedentes tenidos a la vista, y expuestos por el denunciante en su libelo, se corroboraría que el actor tuvo la calidad de prestador de servicios a honorarios con la Ilustre Municipalidad Paine desde el 02 de enero de 2009 hasta el mes de enero de 2021. Así, de la propia declaración formulada por el actor en su libelo, él se encontraba unido con su representada a través de un vínculo de carácter civil o estatutario, en la que el actor en base a sus condiciones y conocimiento fue contratado para la realización de ciertos cometidos específicos que fueron convenidos entre las partes, sin que por ello aquella convención degenere, como aspira la parte demandante, en una relación de carácter laboral.

En ese sentido, entiende la denunciada que el artículo 3° de la Ley N°18.883 especifica de manera taxativa aquellas relaciones que se entienden sujetas al Código del Trabajo, ante lo cual las demás deben regularse en atención al estatuto respectivo. Así, por más que una relación de carácter civil o estatutaria tenga la apariencia de contener los elementos y características de una relación laboral, ello no la convierte en lo pretendido por el actor. Así, es el propio artículo 420 del Código del Trabajo señala cuáles son las materias de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, desarrollando taxativamente cada una de ellas y en ninguna de estas se contempla la posibilidad que en virtud de un juicio laboral se declare la naturaleza de un vínculo contractual preexistente entre sujetos determinados ya que la letra a) de dicho cuerpo legal se limita expresamente a materias contenidas en un contrato de trabajo ya sean estos de carácter individual o colectivos.



En ese sentido, expone el denunciado que este tribunal debía declararse incompetente absolutamente en atención a la materia para conocer de las materias que dicen relación con los funcionarios, dependientes o prestadores de servicios municipales y la Ilustre Municipalidad de Paine, sobre todo en el caso particular, en cumplimiento del principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y las normas antes citadas.

Posteriormente, contestó el libelo pretensor, indicando primero que no existió una relación laboral entre el demandante y la Ilustre Municipalidad de Paine, toda vez que el actor no ingresó a prestar servicios en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo, por el contrario, el demandante prestó servicios a honorarios en las fechas ya indicadas bajo el amparo del artículo 3° y 4° de la Ley N°18.883. Asimismo, y en cuanto a la labor por él desarrollada, señaló que el actor suscribió una serie de contratos de prestación de servicios con su representada, los cuales dan cuenta de las labores específicas que debía desarrollar en función de los programas no permanentes que había creado la municipalidad para tales fines. Así las cosas, los servicios específicos que prestó el demandante, se circunscribieron a las tareas encomendadas en los respectivos contratos de prestación de servicios a honorarios, no revistiendo por dichas circunstancias las características propias del contrato de trabajo. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, tampoco hace una descripción de los servicios que prestaba, no se refiere a la distribución de la jornada de trabajo, quien ejercía el supuesto poder de mando, ante quien debía obediencia, monto y forma de pago de la supuesta remuneración, lo que a todas luces, permite concluir que la libertad en la prestación de los servicios era una característica esencial y predominante de la relación que el demandante sostenía con su representada, reafirmando la tesis de la existencia de un contrato de prestación de servicios a honorarios, más que la de un contrato de trabajo.

Teniendo presente lo anterior, estima improcedente la sanción contemplada en los incisos 5° y 7° del artículo 162 del Código del Trabajo ya que la misma se configura cuando el empleador es el ente que retiene los montos previsionales y luego no las paga a las instituciones previsionales correspondientes. En coherencia de lo anterior, agregó que su representada retuvo los impuestos correspondientes, y pagó el total de los honorarios que nacieron del contrato de prestación de servicios, sin consideraciones de descuentos de ninguna especie, pagando un monto que supone solamente la contraprestación por el servicio realizado según el contrato civil que rige esta relación jurídica. Por ello, exigir que su representada deba pagar las cotizaciones previsionales sería una expropiación patrimonial de fondos públicos que su representada debe velar.

Finalmente, y teniendo presente lo anterior, solicitó que se acoja la excepción de incompetencia absoluta opuesta; y en subsidio de la anterior, que no existe mérito suficiente ni se pudo acreditar la existencia de una relación de trabajo, no procediendo la sanción establecida en los incisos 5 y 7 del artículo 162 del Código del Trabajo, que no es



efectivo que se haya despedido de forma injustificada al demandante, y menos aún se le hayan transgredido alguna garantía constitucional, que no recibió remuneraciones en los términos previstos en el inciso primero del artículo 41 del Código del Trabajo, ni tampoco que se le adeuden, como tampoco se le adeudan dineros por concepto de feriado legal ni proporcional, ni indemnización alguna, solicitando el rechazo de la demanda.

Asimismo, en su primer otrosí, contestó la demanda subsidiaria de despido injustificado con cobro de prestaciones, argumentando la misma en los mismos antecedentes ya descritos y solicitando, por ello, el rechazo de la misma, todo ello con costas.

TERCERO: Que, el 7 y el 17 de febrero de este año se celebró la audiencia preparatoria con la asistencia del denunciante y de la denunciada, realizándose la relación sucinta de los escritos interpuestos por estas. En ese sentido, se tuvo por evacuado el traslado de la excepción de incompetencia, la cual se resolvería en definitiva, rechazándose las demás excepciones y frustrándose el llamado a conciliación

Así, y a continuación, se fijaron como hechos controvertidos los siguientes: 1) Efectividad de haber existido un vínculo laboral entre las partes. Fecha de inicio, término y elementos que lo constituyen. Remuneración pactada y efectivamente percibida por el actor al término de sus servicios; 2) Hechos, pormenores y circunstancias del término de la relación entre las partes. Cumplimiento de las formalidades del despido, en caso de que éste haya sido de naturaleza laboral; 3) Efectividad de haberse vulnerado por la parte denunciada las garantías fundamentales contenidas en el artículo 19 N°1 y 16 de la Constitución Política de la República y del artículo 2° del Código del Trabajo, con ocasión del despido. Hechos, pormenores y circunstancias; 4) En la afirmativa del punto anterior, daños producidos, naturaleza y monto de los mismos y; 5) Efectividad de adeudar la denunciada el feriado legal, 15 días de la remuneración del mes de enero de 2021, las cotizaciones de seguridad social y la indemnización de uso y desgaste de las herramientas, todas éstas señaladas por el actor en su libelo.

Teniendo presente lo anterior, cada una de las partes ofreció los medios de prueba de los cuales se harían valer en la audiencia de juicio respectiva, tal como se consigna en las respectivas actas de audiencia y en el registro de audio.

CUARTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su pretensión, la parte denunciante incorporó en la audiencia de juicio de 5 de abril del presente año sus medios de prueba, consistente en prueba documental, confesional, testimonial y exhibición de documentos. A su vez, la denunciada rindió su prueba, consistente en prueba documental, confesional, testimonial y oficios. De todo aquello quedó registro en la audiencia ya referida lo que consta en el registro de audio.

QUINTO: Que, a través de la prueba rendida por las partes y en base a las reglas de la sana crítica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo, se tuvieron por establecidos los hechos controvertidos tal como se señalará, teniendo



presente este tribunal que para su determinación se deben seguir, a su vez, las reglas dispuestas en los artículos 1.698 del Código Civil y 493 del Código del Trabajo.

SEXTO: Que, teniendo presente que la acción deducida corresponde a la de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, y entendiendo que la demandada descarta la existencia del vínculo contractual alegado, resulta necesario definir, en primer término, la efectividad de existir un vínculo de naturaleza laboral, su fecha de inicio, término y elementos que lo constituyen, junto a la remuneración pactada y efectivamente percibida por el actor al término de sus servicios.

En ese sentido, dicho hecho tiene como objeto acreditar si la relación que unía a las partes, en el periodo indicado por el denunciante, era de aquellas contemplada en el artículo 7° del Código del Trabajo, esto es, una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Producto de lo anterior, es necesario establecer si concurren los elementos ya señalados, esto es la prestación de servicios por parte del actor, el pago por parte de la demandada producto de la prestación de dichos servicios, y si dicha relación se desenvolvía bajo dependencia y subordinación.

Producto de que nuestra legislación no define claramente qué se entiende por los conceptos de dependencia y subordinación, es necesario tener en consideración indicios que nos permitan presumir la existencia de dichos elementos para entender que efectivamente estamos ante una relación laboral. En ese sentido, el artículo 10° del Código del Trabajo nos permiten obtener otros elementos a través de los cuales se entiende que existe relación de subordinación y dependencia, en especial la duración y distribución de la jornada de trabajo, el plazo del contrato y el lugar en donde hayan de prestarse los servicios. Además, los artículos 8° y 12 del mismo cuerpo legal nos entregan otros elementos a través de los cuales podemos desprender la existencia de una relación bajo subordinación y dependencia, como por un lado aquellos servicios que se ejercen de forma continua por un trabajador y en los cuales el empleador puede alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que ellos deben prestarse, de tal forma que es el empleador quien tiene el poder de mando y dirección de las funciones que debe desempeñar el trabajador, ante lo cual estos indicios permitirán entender la existencia de la subordinación y dependencia, más allá de la definición doctrinaria de la misma. Sin perjuicio de aquello, y como otro elemento a considerar, ciertos autores han entendido subordinación como: “la sujeción personal del trabajador, en la actividad laborativa, en su fase de ejecución, dentro de la organización técnico productiva de la empresa, a las directivas, normas y disciplina del empleador, a fin de que sólo incorpore su acción a las tareas específicas que le señala éste bajo sus poderes técnicos empresariales” (Macchiavello Contreras, Guido. 1986 p. 174) y dependencia como “una noción económica de precariedad del trabajador que requiere del trabajo para subsistir” (Gamonal Contreras,



Sergio y Guidi Moggia, Caterina. 2012 p. 31). De este modo, será necesario estar a dichos elementos para determinar si existe o no una relación laboral.

SÉPTIMO: Que, a fin de acreditar los elementos ya aducidos, se tuvo presente los decretos Alcaldicios, en los cuales constan los contratos suscritos, N°149 del 28 de enero de 2009, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009; N°236 del 28 de enero de 2011, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011; N°260 del 1 de febrero de 2012, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2012; N°1473 del 6 de julio de 2012, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 28 de junio de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012; N°147 del 24 de enero de 2013, que aprobó el contrato a honorarios, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; N°176 del 22 de enero de 2014, que aprobó el contrato a honorarios, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014; N°406 del 29 de enero de 2015, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 02 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015; N°717 del 26 de febrero de 2015, que rectifica decreto N°406 de fecha 29 de enero de 2015; N°1613 del 24 de abril de 2015, que aprobó modificación de contrato de Prestación de Servicios a Honorarios aprobado mediante decreto alcaldicio N°406 de fecha 29 de enero de 2015; N°425 del 29 de enero de 2016, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016; N°402 del 31 de enero de 2017, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017; N°367 del 26 de enero de 2018, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018; N°234 del 22 de enero de 2019, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 hasta el 30 de abril de 2019; N°2278 del 17 de mayo de 2019, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 01 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019; N°215 del 24 de enero de 2020, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020; N°1880 del 16 de abril de 2020, que aprobó el contrato a honorarios, por el período comprendido entre el 01 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Asimismo, se acompañaron las boletas de honorarios N°1, 2, 3, 4, 5 emitidas por el demandante a la Ilustre Municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2011; boletas de honorarios N°6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 emitidas por el demandante a la Ilustre municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2012; boletas de honorarios N°20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 emitidas por el demandante a la Ilustre Municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2013;



boletas de honorarios N°35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 emitidas por el demandante a la Ilustre municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2014; boletas de honorarios N°49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 emitidas por el demandante a la Ilustre municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2015; boletas de honorarios N°62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 emitidas por el demandante a la Ilustre municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2016; boletas de honorarios N°77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 emitidas por el demandante a la Ilustre municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2017; boletas de honorarios N°90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, emitidas por el demandante a la Ilustre municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2018; boletas de honorarios N°103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 emitidas por el demandante a la Ilustre municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2019; boletas de honorarios N°115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 emitidas por el demandante a la Ilustre municipalidad de Paine, por servicios prestados el año 2020.

OCTAVO: Que, en atención a dichas probanzas, consta que el 2 de enero de 2009 se suscribió el siguiente contrato entre las partes:

"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS EN SERVICIOS COMUNITARIOS

En Paine, a 02 de Enero de 2009, entre la I. Municipalidad de Paine, corporación autónoma de derecho público, R.U.T. N°69.072.600-9, en adelante, "La Municipalidad", representada por su Alcalde don DIEGO VERGARA RODRIGUEZ, chileno, casado, R.U.T. N°14.451.170-0, ambos con domicilio en Avenida General Baquedano N°490 Comuna de Paine, por una parte; y, por la otra, don(ña) CARLOS ACEVEDO GAJARDO, R.U.T. N°5.145.404-9, chileno(a), domiciliado(a) en Gran Avenida N°368, Villa El Bosque, Comuna de Paine, se ha convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES:

I. La Municipalidad de Paine es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna, en conformidad con las normas generales y, en particular, a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades:

II. La Municipalidad cuenta con una dotación limitada de recursos humanos de nivel profesional y técnico, por lo cual requiere contratar a personas de diversas especialidades y competencias para el logro de un adecuado cumplimiento de sus fines y objetivos.

III. La Municipalidad cuenta con disponibilidad de recursos en su presupuesto 2009, que le permiten contratar servicios personales en forma transitoria, para el desarrollo de actividades que vayan en beneficio de la comunidad.



IV. En virtud de las consideraciones anteriores, el Sr. Alcalde ha autorizado la contratación de profesionales y técnicos que presten servicios de su especialidad.

PRIMERO: Objeto.

Por el presente acto, la Municipalidad contrata a don Carlos Acevedo Gajardo, para que ejecute el siguiente servicio personal en la Municipalidad de Paine: Trabajos de Jardinería en plazas públicas de Paine Centro.

Para todos los efectos relativos al desempeño del servicio su contraparte técnica será la Dirección de Desarrollo Comunitario, quien deberá entregar las orientaciones conducentes al adecuado desarrollo de las actividades, aprobar con su nombre y firma las boletas de honorarios respectivas. Del mismo modo, le corresponderá solicitar el término del contrato por incumplimiento de las obligaciones pactadas, si correspondiere. Se deja expresa constancia de que los servicios prestados no podrán involucrar, en modo alguno, la ejecución de labores directivas o de jefatura por parte del prestador(a).

SEGUNDO: Plazo de Ejecución.

El servicio encomendado será realizado dentro del período comprendido entre el 02 de Enero y el 31 de Diciembre de 2009.

TERCERO: Honorarios a suma alzada.

Como retribución por los servicios encomendados, el/la profesional recibirá una suma bruta mensual de \$222.222. (doscientos veintidós mil doscientos veintidós pesos). Dicha suma se pagará en las oficinas de la Municipalidad, a petición escrita de la contraparte técnica y contra prestación de la boleta de honorarios debidamente visada por ésta última.

El gasto originado por la presente contratación deberá ser imputado al ítem 215.22.008.003 "Servicios de Mantenimiento de Jardines", área de gestión "Servicios Comunitarios" del Presupuesto Para el año 2009.

CUARTO: Término Anticipado.

Las partes se reservan el derecho de poner término al presente contrato, previo aviso formulado a la contraparte con, a lo menos quince días de anticipación. El aviso de la Municipalidad podrá basarse en la evaluación deficiente del prestador en el cumplimiento de su contrato o en razones presupuestarias.

QUINTO: Ley de Probidad Administrativa.

Las partes reconocen expresamente que el(la) prestador(a) presentó declaración jurada, en que señaló no estar afecto(a) a ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que pasan a expresarse:

a) No tener vigente o suscribir, por si o por terceros, contratos o cauciones ascendentes a doscientas unidades tributarias mensuales o más, con la Municipalidad de Paine.

No tener litigios pendientes con la institución antes señalada, a menos que se



refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. No ser director, administrador, representante o socio titular del diez por ciento o más de los derechos de sociedades que tengan contratos o cauciones vigentes ascendentes a doscientas unidades tributarlas mensuales o más, o litigios pendientes con la Municipalidad de Paine.

b) No tener calidad de cónyuge, hijo, adoptado o pariente, hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive, de la Municipalidad de Paine.

c) No estar condenado por crimen o simple delito.

SEXTO: Ejemplares y tramitación

El presente contrato se extiende en cuatro ejemplares e igual tenor y fecha, dos de los cuales deben quedar en archivos de la Municipalidad, uno en poder de la contraparte técnica y uno en poder del Prestador(a) de servicios.

SÉPTIMO: Declaración Expresa

Las partes declaran y aceptan expresamente la circunstancia de que el cometido materia de esta contratación no altera la calidad de trabajador independiente del prestador(a) y no constituye vínculo de subordinación y dependencia para ningún efecto legal o administrativo. De este modo, el prestador(a) declara estar en conocimiento de no tener derechos adicionales a aquellos contenidos en este Instrumento.

OCTAVO: Jurisdicción.

Para los efectos judiciales que pudieren derivarse del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia competentes.”

Respecto de dicho instrumento, el 26 de enero de 2011, se suscribió uno de iguales características salvo que respecto a las funciones se indica: “Apoyo en diversas labores a determinar por la dirección de aseo, a fin de colaborar con el mejoramiento urbano comunal, en el marco del programa “saneamiento básico y mejoramiento urbano” y que el honorario ascendía a \$291.760.

Posteriormente el 24 de enero de 2012, se indicó en funciones: “Apoyo en diversas labores a determinar por la dirección de aseo, a fin de colaborar con el mejoramiento urbano comunal, en el marco del programa ‘regeneración urbana’ aprobado por el Decret Exento Ex. N°2414 de fecha 23 de diciembre de 2011”, dando cuenta de un honorario de \$291.760.

Luego, el 28 de junio de 2012, se cambia la redacción a funciones indicando: “Apoyo en diversas labores a determinar por la dirección de aseo, a fin de colaborar con el mejoramiento urbano comunal, en el marco del programa ‘regeneración urbana’ aprobado por el Decret Exento Ex. N°2414 de fecha 23 de diciembre de 2011”, fijando el mismo honorario.



XJEY YZXS

Posteriormente, el 16 de enero de 2014, se vuelve a cambiar la redacción de funciones indicando: “Apoyo en diversas labores a determinar por la dirección de aseo, a fin de colaborar con el mejoramiento urbano comunal, en el marco del programa ‘regeneración rural’ aprobado por el Decreto Exento Ex. N°2210 de fecha 16 de diciembre de 2013.”, cambiando el honorario a \$306.348

A continuación, el 21 de enero de 2015, se vuelve a cambiar la redacción de las funciones indicando: “Apoyo en diversas labores a determinar por la dirección de aseo, a fin de colaborar con el cuidado y mantenimiento de áreas verdes de la Comuna, en el marco del programa ‘regeneración urbana’, aprobado por el Decreto Exento Ex. N°2689 de fecha 22 de diciembre de 2014”, fijando como honorario \$346.500. Además, se indicó en ese contrato, que “a contar de la remuneración correspondiente al mes de febrero de 2015 y en lo sucesivo, el prestador del servicio deberá adjuntar a su boleta de honorarios el certificado de pago de cotizaciones previsionales y de Mutualidad de la institución en que se encuentre afiliado, a su libre elección. Ambos documentos deberán también ser debidamente visados por la contraparte técnica.”

Luego, el 16 de abril de 2015, se modifica el contrato suscrito el 21 de enero de ese año, indicando que la retribución por los servicios encomendados recibirá una suma bruta mensual de \$346.500 y que dicha suma se pagará en las oficinas de la Municipalidad, a petición escrita de la contraparte técnica y contra presentación de boleta de honorarios debidamente visada por ésta última.

El año siguiente, el 25 de enero de 2016, vuelve a reformularse las funciones dando cuenta de: “Apoyo en diversas labores a determinar por la Dirección de Aseo, a fin de colaborar con el cuidado y mantenimiento de áreas verdes de la Comuna, en el marco del programa ‘Regeneración Rural’ aprobado por el Decreto Exento Ex N°4314 de fecha 18 de diciembre de 2015.”, estableciendo un honorario de \$360.707 y agregando al contrato que: “La municipalidad podrá entregar uniforme indumentaria o elementos distintivos al prestador del servicio que deberá usar en el cumplimiento de su cometido así como también podrá hacer entrega de un teléfono móvil de propiedad de la municipalidad, si fuere necesario a juicio de su contraparte técnica, para la mejor prestación del servicio, todos los cuales deberá restituir al término de su contrato y que bajo ningún respecto pasarán a ser de propiedad del prestador.”

A continuación, el 31 de enero de 2017 se expresan las funciones como: “Para que preste sus servicios en el proyecto reparación de mobiliario de áreas verdes recreativas que presentan riesgos en la comunidad, que se lleva a efecto en la Dirección de Aseo y Ornato, en el marco de los Programas aprobados mediante Decreto N°4501/2016 de fecha 19 de diciembre de 2016.” Se fijan los honorarios en \$372.250 y vuelve a mencionarse que “La municipalidad podrá entregar uniforme indumentaria o elementos distintivos al prestador del servicio que deberá usar en el cumplimiento de su cometido así como también podrá hacer entrega de un teléfono móvil de propiedad de la



municipalidad, si fuere necesario a juicio de su contraparte técnica, para la mejor prestación del servicio, todos los cuales deberá restituir al término de su contrato y que bajo ningún respecto pasarán a ser de propiedad del prestador.”

Posteriormente, el 24 de enero de 2018 se da cuenta que se suscribe el contrato: “Para que preste sus servicios en mantención de áreas verdes, en el programa desarrollo de proyectos que contemplen intervención de tipo paisajismo, programa reparación de mobiliario de áreas verdes recreativas que presentan riesgos en la comunidad, que se lleva a efecto en la Dirección de Aseo y Ornato”, no haciendo mención a honorario alguno.

Luego, el 22 de enero de 2019, se indica que presta sus servicios como: “mantención de áreas verdes, en el programa reparación de mobiliario recreativo, en áreas verdes que representan riesgo en la comunidad, que se ejecuta en la Dirección de Aseo y Ornato, en el marco de los servicios comunitarios de los programas municipales, aprobado mediante Decreto N°5056/2018 de fecha 30 de noviembre de 2018.” El honorario se pacta a suma alzada indicando que: “Como retribución por los servicios encomendados, el prestador recibirá la suma única bruta de \$1.524.000 que se pagarán en 4 cuotas entre enero y abril de 2019, a petición escrita de la contraparte técnica y contra presentación de informe y boleta de honorarios debidamente visados por esta última.”

Esto se continua el 7 de mayo de 2019, especificando que el honorario a suma alzada es la suma única bruta de \$3.048.000 que se pagarán en 8 cuotas entre mayo y diciembre de 2019, a petición escrita de la contraparte técnica y contra presentación de informe y boleta de honorarios debidamente visados por esta última.

Posteriormente, el 23 de enero de 2020, se vuelve a suscribir contrato: “Para que preste sus servicios en el programa recuperación de mobiliario urbano en áreas verdes que presenten riesgo para la comunidad, el cual se desarrolla en la Dirección de Aseo y Ornato, cuyo programa fue aprobado mediante Decreto N°5408/2019” El honorario se pacto a suma alzada, recibiendo el actor: “la suma única bruta de \$1.175.004 que se pagarán en 3 cuotas entre los meses de enero y marzo de 2020, a petición escrita de la contraparte técnica y contra presentación de informe y boleta de honorarios debidamente visados por esta última. El pago de las cuotas se efectuará contra la presentación del ‘informe prestación de servicios honorarios’.

Asimismo, se especificó que: “la Unidad Técnica podrá, en el evento que el prestador no hubiere logrado cumplir con su cometido en un mes determinado, descontar aquella porción de su cuota que corresponda con el objeto de pagar única exclusivamente por la prestación entregada, situación que ponderará mensualmente la Unidad Técnica evaluando el informe emitido por el prestador.”

Finalmente, se suscribió modificación del contrato anterior el 14 de abril de 2020, en donde se pactó que el honorario sería a suma alzada: “el prestador recibirá la suma única bruta de \$3.525.012 que se pagarán en 9 cuotas entre los meses de abril y



XJEY YZXS

diciembre de 2020, a petición escrita de la contraparte técnica y contra presentación de informe y boleta de honorarios debidamente visados por esta última. El pago de las cuotas se efectuará contra la presentación del ‘informe prestación de servicios honorarios’”. Se volvió a mencionar que: “la Unidad Técnica podrá, en el evento que el prestador no hubiere logrado cumplir con su cometido en un mes determinado, descontar aquella porción de su cuota que corresponda con el objeto de pagar única exclusivamente por la prestación entregada, situación que ponderará mensualmente la Unidad Técnica evaluando el informe emitido por el prestador.”

Asimismo, y teniendo presente las boletas de honorarios acompañadas, todas estas fueron emitidas a favor de la demandada. Sin embargo, se deja constancia que no constan las boletas 11, 19, 23, 31, 47, 75 y 76, las únicas de entre las 126 emitidas que no serían continuas con los servicios prestados a la demandada.

NOVENO: Que, en conjunto con los antecedentes antes descritos, este tribunal tiene presente, en especial, la declaración de Rosario Larderel, testigo presentada por ambas partes, quien indicó que es Directora de Aseo y Ornato hace aproximadamente 3 años y medio, trabajando antes como jefa de gabinete, prestando servicios por un lapso de 14 años para la demandada. Indicó que conoce al denunciante porque trabajaba en el municipio desde la época de Diego Vergara en mantención de áreas verdes en el frontis del municipio, barriendo y manteniendo limpio el sector, preocupándose de una huerta que hacía con el alcalde. Agregó que el actor trabajaba en el municipio desde 2011 o 2009, 2010, que tiene unos 70 años y que dejó de trabajar después de la pandemia, el 2019. Expuso también que era ella quien decidía si se renovaba o no el contrato ya que se generan contratos anuales por prestación de servicios y en este caso no se renovó, ya que con la pandemia, en donde se exigió que los adultos mayores se fueran a sus casas, se les dio la posibilidad que se fueran a sus casas, y que cuando bajaran los contagios se reintegraran. Sin embargo, ese año no retomó sus funciones y a pesar de que se propuso que trabajara el año 2022, no volvió a retomar su trabajo.

Añadió a continuación, respecto al desempeño del denunciante, que no tenía mal desempeño, aunque tampoco espectacular, faltando bastante dado que tenía muchos trámites que hacer comunicándole al alcalde que necesitaba salir, tampoco tenía horario, y podía estar desde las 8, pero el trabajo lo dejaba incompleto. Asimismo, indicó que las labores las asignaba el alcalde, en las huertas, mantención de áreas verdes, relacionándose el alcalde directamente con él cuando ella jefa de gabinete. Sus funciones las prestaba todos los días, pero faltaba a veces los lunes o el miércoles y no estaba siempre de 8:30 a 19:30 horas, gozando de una hora de colación. Indicó que siempre se le pago íntegramente su sueldo inclusive en época de la pandemia ya que los adultos mayores fueron enviados a sus casas, pagándole entre 380.000 y 450.000 pesos

Expuso luego que quién controlaba que Carlos hiciera bien o mal su trabajo era ella misma ya que firmaba la boleta todos los meses y que el último contrato no se



renovó porque se conversó con él cómo retomar labores, según lo conversado el año anterior, pero no se acercó a organizarlos para partir trabajando. Esto solo quedó de manifiesto a través de conversaciones sostenidas entre ella y el demandante. En ese sentido, el año 2020, a fines de año se retomaron las funciones pero el actor no quiso por miedo a la pandemia y por ello no se le contempló para el año siguiente pero si se lo tenía presupuestado para el año 2022.

Añadió que el demandante trabajó de forma ininterrumpida 10 años con boleta de honorarios y que no se le dio una carta formal de término de contrato ya que ella no la ingresó. Que respecto a su ausencia no fue reemplazado ya que hay un equipo de mantención de áreas verdes y que asumió las funciones de mantención del frontis del municipio, siendo uno de ellos Ángel Reyes, un joven que había sido nombrado planta de la municipalidad, prestando funciones a partir del año 2021 y percibiendo una remuneración aproximada de \$400.000 a \$420.000.

Continuó su declaración indicando que el actor no firmaba asistencia y se tomaba vacaciones en las mismas fechas que el alcalde, no constando que firmaba comprobante de vacaciones. Respecto a la emisión de las boletas de honorarios estas se emitían contra informe que generaba la misma municipalidad, el cual se hacía en base a lo que relataba el funcionario, contándole que estuvo en una plaza o que había cortado el pasto, etc, destacando que el demandante no salía de las dependencias de la municipalidad. Respecto a las cotizaciones, estas se pagaban por el actor, de tal manera que si no lo hace se descuentan de la devolución de impuestos en abril, indicando que si tiene accidentes se debe generar un descuento, si presta servicios un mes completo y faltan, hay descuentos y respecto al seguro de salud, se dan charlas para que las personas se informen. Rescato, asimismo, que el actor siempre se dirigía al alcalde, a quien también le pedía ayuda por temas personales y que siempre se le entregó todo el equipo que necesitaba, incluidas las herramientas.

DÉCIMO: Que, de los antecedentes arribados en la presente causa, expuestos precedentemente, y respecto al hecho a probar ya aducido es posible tener por acreditado lo siguiente:

a) Que, consta en estos antecedentes que el actor prestó servicios para la demandada de manera ininterrumpida a lo menos desde el 26 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2020, toda vez que, a través de la seguidilla de contratos suscritos, ratificados estos con los respectivos decretos alcaldicios, se da cuenta que la ligazón con la demandada se habría dado durante ese periodo. Asimismo, no resulta posible acreditar dicha continuidad durante el año 2010, ya que no hay antecedente alguno que dé cuenta de aquello.

b) Que, tanto de los mismos contratos suscritos y reseñados en la motivación octava precedente, como de la declaración de la testigo jefa de Aseo y Ornato, dan cuenta de que las labores que prestaba el demandante eran de jardinería, manteniendo de plazas



XJEY YZXS

y parques de la municipalidad, variando el lugar de prestación de servicios dependiendo de lo expuesto en cada contrato, pero desempeñando las funciones principalmente en el frontis de la municipalidad.

c) Que, respecto al pago realizado por el demandado al demandante, consta de las boletas de honorarios acompañadas, que este ascendía a una suma constante que variaba aproximadamente año a año, siendo la última remuneración pactada la suma de \$391.668. En ese sentido, y aun cuando se daba cuenta de un pago por un monto único en los últimos contratos, de igual modo se iba pagando mes a mes. Así, dichos montos se cancelaban previo informe verbal que realizaba el actor de las funciones prestadas, a fin de que la misma municipalidad confeccionara la respectiva boleta de honorarios.

d) Que, respecto al lugar donde se prestaban los servicios, el contrato de servicios firmado entre las partes da cuenta que estos se desempeñarían según instrucciones de la dirección de Aseo y Ornato. Sin embargo, de la propia declaración de la jefa de dicha repartición, las labores las prestó en la misma municipalidad, encargándose principalmente del mantenimiento del frontis de esta.

e) Que, respecto a la jornada prestada, el actor concurría de lunes a viernes desde las 8:30 horas hasta las 19:30 horas, con una hora de colación. Sin embargo, se era condescendiente con él y se le permitía ausentarse ciertos días, previa autorización del alcalde, o llegar más tarde.

f) Que, por último, de la declaración de la testigo ya aducida, se da cuenta que el actor recibía instrucciones principalmente del alcalde o inclusive de ella misma como jefa de Aseo y Ornato.

UNDÉCIMO: Que, teniendo presente los indicios ya aducidos, resulta necesario determinar si los servicios prestados por el actor tienen o no el carácter de ser servicios esporádicos en donde no existe un vínculo de subordinación y dependencia.

En ese sentido, de los antecedentes anteriormente señalados, este tribunal estima que efectivamente entre las partes existió una relación laboral con las características contempladas en el artículo 7° del Código del Trabajo, toda vez que el actor prestaba servicios de mantención de jardines, independiente de la redacción de los servicios a prestar contenida en los diversos contratos suscritos, a lo menos desde el 26 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2020, percibiendo como última remuneración la suma ascendente a \$391.668 pesos, prestando sus servicios en dependencias de la municipalidad, con una jornada de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas, con una hora de colación y recibiendo instrucciones del alcalde o del departamento de Aseo y Ornato.

En ese orden de ideas, debemos tener presente lo dispuesto en el artículo 8° inciso 1° del citado cuerpo legal, el cual dispone que: "Toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo". De este modo, desde el momento en que el actor acredita indicios de que en la especie concurren los elementos dispuestos en el artículo 7° del Código del Trabajo, la



relación que vincula a las partes debe regirse por lo que nuestra doctrina y jurisprudencia ha entendido como “principio de realidad” por medio del cual debe estarse a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido. Producto de lo anterior, los indicios acreditados nos permiten concluir que en la especie ha existido una relación laboral, y por lo tanto debe acogerse la demanda en ese sentido.

A mayor abundamiento, y teniendo presente el principio ya aducido, no basta solamente con negar la existencia de una relación laboral para entender que la misma no existe, sino que es carga de la demandada, en el caso de que se acrediten los indicios de la existencia del vínculo contractual, el demostrar que la naturaleza del mismo era diversa, debiendo acreditar que el servicio prestado era uno de aquellos en los que es el prestador tiene el dominio de la función que realiza, agregando además, que debe ser de aquellos que implican que el prestador de los servicios no dependa principalmente del servicio pactado para su supervivencia, todo lo cual no fue acreditado en la especie. En ese sentido, la laxitud que podría haber existido en la asistencia del actor, no es un argumento suficiente que permita entender que efectivamente el servicio prestado era de naturaleza civil, ya que dentro de nuestra legislación laboral existe la posibilidad de excluir el vínculo laboral del pacto de jornada, tal como lo dispone el artículo 22 inciso 2º del Código del Trabajo, lo que no por ello implica necesariamente que el vínculo laboral se transforme en uno de naturaleza civil.

DUODÉCIMO: Que, teniendo presente lo ya señalado, y dado que en la especie se dedujo la excepción de incompetencia absoluta de este tribunal para conocer del presente litigio, resulta necesario determinar si la relación que unía a las partes era una de las contempladas en el artículo 3º o 4º de la Ley N°18.883.

En ese sentido, este tribunal tiene presente lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual prescribe que: “las Municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas” y; el artículo 3º del mismo cuerpo legal, el cual dispone dentro de las funciones privativas de cada Municipio, entre otras, “f) El aseo y ornato de la comuna.” En ese sentido, y teniendo presente dichas disposiciones, puede concluirse que las labores que debía cumplir el actor, todas ellas relacionadas con el aseo y ornato de la comuna, se insertan en las funciones propias, habituales y permanentes de cada Municipio, reguladas por su Ley Orgánica Constitucional, y en ningún caso, “específicas” u “ocasionales”, ya que las mismas han sido ejecutadas de manera permanente por parte de trabajadores especialmente destinados a su cumplimiento, de lo que se sigue que no resulta plausible darles el carácter de relaciones contractuales amparadas por la hipótesis excepcional de la prestación de servicios a honorarios, por desmarcarse del ámbito propio de la regulación



estatutaria en comento, todo lo cual ha sido razonado por nuestra Excelentísima Corte Suprema en sentencia de fecha 22 de enero de 2018, en causa ROL N°34.530-2017. En ese sentido, se descarta que la relación que unía a las partes fuera una de las contempladas en el artículo 4° de la ley N°18.883 ya aducido, producto de lo previamente razonado.

Además, el artículo 3° de la ley en comento, dispone que: “Quedarán sujetas a las normas del Código del Trabajo, las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación. El personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad se registrará también por las normas del Código del Trabajo. Los médicos cirujanos que se desempeñen en los gabinetes sicotécnicos se registrarán por la ley N°15.076, en lo que respecta a remuneraciones y demás beneficios económicos, horario de trabajo e incompatibilidades. En las demás materias, que procedan, les serán aplicables las normas de este estatuto.” En ese orden de ideas, al no haber sido acreditado que se cuenta con un balneario o sector turístico, o que los servicios prestados por la actora se desempeñaban en organismos o entidades del sector público traspasados a la municipalidad, o que el actor no prestaba funciones en virtud de lo dispuesto en la ley N°15.076, se descartará la posibilidad de que el actor haya desempeñado sus funciones en base a lo dispuesto por el artículo anteriormente descrito.

Teniendo presente lo anterior, y tal como lo ha señalado nuestra jurisprudencia, específicamente en recurso de unificación de jurisprudencia de fecha 18 de diciembre de 2017, en causa ROL N°35.737-2017, aquellas relaciones que no se contemplen en la Ley N°18.883, y cumpliendo con los requisitos de nuestra legislación laboral, tendrán dicho carácter en virtud del principio de primacía de la realidad, contemplado en los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo ante lo cual no puede escudarse la institución pública en lo dispuesto en el artículo 6° de la Constitución Política de la República en el entendido de que los órganos del estado deben someter su acción a la Constitución y las leyes, señalando que no puede contratar a personas fuera de lo dispuesto en la Ley N°18.883, toda vez que dicha situación implicaría vulnerar lo dispuesto en el artículo 1° de la misma Constitución Política de la República, en su parte en la que dispone que el estado está al servicio de la persona humana, ya que considerar que la interpretación de los artículos 7° y 8° del Código del Trabajo debe realizarse de forma restrictiva respecto de los organismos estatales implicaría, en definitiva, que el estado estaría al servicio de dicha institución y no del trabajador, a quien se le verían conculcados sus derechos con dicha interpretación. En ese sentido, se rechazará la excepción de incompetencia absoluta promovida.

A mayor abundamiento, la sanción contemplada por el artículo 6° de la Constitución Política de la República no puede recaer sobre el trabajador a quien no se le



respetaron sus derechos laborales, sino en quien hubiera ejecutado la acción respectiva sin cumplir adecuadamente la legislación vigente.

DÉCIMO TERCERO: Que, respecto al segundo hecho a probar, consistente en los hechos, pormenores y circunstancias del término de la relación entre las partes, junto con la determinación de si se cumplieron las formalidades del despido, en caso de que éste haya sido de naturaleza laboral, y teniendo presente lo razonado en las motivaciones precedentes, se tiene presente que la demandada no acreditó antecedente alguno que diera cuenta de las razones del despido ni menos el cumplimiento de las formalidades del mismo, teniéndose en ese sentido por no acreditado la efectividad de haber procedido a desvincular al actor en conformidad a la ley, entendiendo en ese sentido que el despido fue carente de causal.

DÉCIMO CUARTO: Que, habiendo acreditado que existió un vínculo de naturaleza laboral, y dado que la demanda solicitó declarar, en lo principal, que el despido del actor fue vulneratorio de derechos fundamentales, en primer término, es necesario definir si se acreditaron los indicios planteados por el actor.

En ese orden de ideas, el denunciante señaló como primer indicio la emisión de boletas de honorarios para pagar la remuneración del actor lo que acreditaría la prestación ininterrumpida de sus servicios; como segundo indicio, la copia del carnet del denunciante, el cual da cuenta que nació el 11 de noviembre de 1945, y que por lo tanto a la fecha de su despido, tenía 75 años; como tercer indicio, certificado médico que da cuenta de los efectos lesivos que habría tenido en el actor la manera en que se puso término al contrato y; como cuarto indicio, que fue reemplazado en sus funciones.

DÉCIMO QUINTO: Que, teniendo presente lo acreditado en esta causa, se tiene por justificado el primer y cuarto indicio de la vulneración alegada. Asimismo, respecto al tercer indicio, se acompañó certificado médico emitido por la doctora doña Andrea Muñoz Veloso del centro médico Santa Catalina salud de Paine, con fecha 08 de marzo de 2021 que da cuenta de los padecimientos del denunciante post despido verbal, específicamente ansiedad, trastornos gastrointestinales y vértigo.

Respecto del segundo indicio, se tuvo presente certificado de nacimiento del denunciante, don Carlos Agustín Acevedo Gajardo, emitido por el Registro Civil, el cual da cuenta de que nació el 11 de noviembre de 1945, y que al momento del término de la relación laboral tenía 75 años. Sin embargo, también se tiene presente la declaración del mismo denunciante, quien al absolver posiciones indicó que supo de más personas en sus mismas condiciones que por la pandemia fueron enviados a la casa, desconociendo si se le pagaban sus honorarios de forma íntegra. Dichas personas tenían una edad similar a la de él, e inclusive había alguien de 80 años, desconociendo si todos continuaron prestando servicios, salvo una persona que prestaba las mismas funciones que él y que la habría visto trabajando alrededor de la municipalidad.

DÉCIMO SEXTO: Que, teniendo presente lo anterior, este tribunal destaca que la



vulneración reclamada radica en la contravención a lo dispuesto en el artículo 2º incisos 3º y 4º del Código del Trabajo, el cual dispone que: “Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.”

En ese sentido, y entendiendo que la vulneración alegada radica en una discriminación producto de la edad del actor, es el mismo quien expuso que una persona de su misma edad prestaba servicios en el lugar donde él los desempeñaba, con posterioridad al término del vínculo laboral. En ese orden de ideas, este tribunal entiende que no se acredita fehacientemente que el reemplazo de las funciones del actor haya sido en razón de su edad, lo que impide tener por acreditado el indicio fundamental que sostiene la acción de vulneración reclamada, ante lo cual se rechazará la demanda de vulneración de garantías fundamentales con ocasión del despido.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, teniendo presente el rechazo de la denuncia promovida, y entendiendo que el daño moral alegado se asocia a esta, nada se dirá respecto a los daños que podría haber sufrido el actor producto de la situación vivenciada.

DÉCIMO OCTAVO: Que, teniendo presente el rechazo de la demanda principal, este tribunal hace mención que subsidiariamente se dedujo acción de despido injustificado.

En ese sentido, habiéndose acreditado la existencia de una relación laboral, y que la parte demandada no acreditó justificación alguna al despido de fecha 31 de diciembre de 2020, este tribunal tiene por acreditado que el despido del cual fue objeto el demandante, fue carente de causal, y ante ello la demandada deberá pagar las prestaciones dispuestas en el artículo 168 del Código del Trabajo.

Producto de lo anterior, la parte demandada deberá pagar al actor la suma de \$391.668 de pesos por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo, \$3.525.012 de pesos por concepto de indemnización por años de servicio, y \$1.762.506 de pesos por concepto del recargo contemplado en la letra b) del artículo 168 ya mencionado.

DÉCIMO NOVENO: Que, respecto al hecho a probar consistente en la efectividad de adeudar la denunciada el feriado legal, 15 días de la remuneración del mes de enero de 2021, las cotizaciones de seguridad social y la indemnización de uso y desgaste de las herramientas, este tribunal tiene presente los antecedentes ya incorporados, en conjunto con los apercibimientos contenidos en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo que se



hicieron efectivos en la audiencia de juicio.

En ese sentido, respecto de los 15 días de remuneración del mes de enero de 2021, este tribunal hace presente que el vínculo contractual finalizó el 31 de diciembre de 2021, no habiéndose acreditado la existencia de deuda por los 15 días de enero alegados.

Respecto al desgaste de herramientas, no se acompañó antecedente alguno que diera cuenta de qué herramientas se usaron, el valor de estas y el desgaste de las mismas, ante lo cual se rechazará dicha prestación.

Asimismo, respecto al feriado legal demandado, y habiéndose acreditado la relación laboral existente, no consta en el libelo pretensor el cálculo que permite arribar al monto solicitado, producto de lo cual este tribunal rechazará dicha pretensión en atención a su indeterminación.

Finalmente, y respecto a las cotizaciones de seguridad social, la demandada no acompañó antecedente alguno que diera cuenta del pago de dichas cotizaciones, ante lo cual la misma deberá pagar dichas cotizaciones en razón de una remuneración base de \$391.668 pesos entre los periodos de 26 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2020.

VIGÉSIMO: Que, sin perjuicio de haberse decretado la obligación por parte de la demandada del pago de las cotizaciones adeudadas, este tribunal comparte el criterio asentado por nuestra Excelentísima Corte Suprema y que se refleja en sentencia de reemplazo en causa ROL N°94.195-2020 de 22 de febrero de 2022, en virtud del cual, cuando se ha declarado la existencia de un vínculo laboral a partir de contratos de honorarios suscritos con órganos de la Administración del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 18.575, se debe tener presente que los mismos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, ante lo cual no nos encontramos en la hipótesis para la que se previó la figura de nulidad de despido, excluyendo la idea de simulación o fraude por parte del empleador que intenta ocultar por la vía de contratación a honorarios la existencia de una relación laboral. En ese sentido, la aplicación de la sanción contemplada en dicha disposición se desnaturaliza respecto de los contratos celebrados por órganos del Estado, ya que los mismos no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen pertinente, ya que para ello requieren un procedimiento condenatorio, gravando de forma desigual al ente público respecto del privado.

Producto de lo anterior, se rechazará la demanda por dicho concepto, declarando que en la especie no se aplica la sanción de nulidad del despido tal como se indicó precedentemente.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, respecto del certificado emitido por el alcalde don Diego Vergara, acreditando idoneidad y antigüedad laboral del denunciante, “Resolución Concurso Público” donde se escoge formalmente a don Ángel Reyes Reyes como “Planta



auxiliar Grado 18", realizando funciones similares a las del actor en la municipalidad, Certificado de nacimiento de don Ángel Reyes Reyes, C.I 17.152.709-0, donde se acredita que tiene solo 31 años, Certificado Laboral de fecha 25 de enero de 2021 emitido por la dirección de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Paine, certificando la fecha de cese de funciones del denunciante, y las declaraciones de Paula Cornejo del Solar, y Esteban Yévenes Santibáñez, valorizados, en nada alteran lo precedentemente resuelto, ya que los mismos resultan sobreabundantes a fin de tener por acreditados los hechos a probar tal como se expuso precedentemente.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, no se condenará en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 7, 9, 10, 41, 58, 63, 66, 71, 73, 162, 163, 168, 172, 453 y siguientes, todos del Código del Trabajo, artículos 3° y 4° de la Ley N°18.883, artículo 1° de la Ley N°18.575, artículos 1°, 3° y 8° de la Ley N°18.695, artículos 1° y 6° de la Constitución Política de la República, y artículo 1.698 y siguientes del Código Civil, **SE RESUELVE:**

- I. Que, **se rechaza** la excepción de incompetencia deducida por la demandada.
- II. Que, **se rechaza** la denuncia de tutela laboral solicitada por don **Carlos Agustín Acevedo Gajardo**, en contra de la **Ilustre Municipalidad de Paine**.
- III. Que, **se acoge** la demanda subsidiaria deducida y, en consecuencia, se declara la existencia de una relación laboral entre don **Carlos Agustín Acevedo Gajardo**, y la **Ilustre Municipalidad de Paine**, la cual tiene su inicio el 26 de enero de 2011 y su término el 31 de diciembre de 2020, declarando que el despido de 31 de diciembre de 2020 es incausado y sin aviso previo.
- IV. Que, producto de lo anterior, la demandada deberá pagar al actor las siguientes sumas por los conceptos que se indican:
 - a) \$391.668 pesos, por indemnización sustitutiva del aviso previo.
 - b) \$3.525.012 pesos, por concepto de indemnización por años de servicio.
 - c) \$1.762.506 pesos, por concepto del recargo contemplado en el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.
- V. Que, las sumas ordenadas pagar de manera precedente, deberán serlo con los respectivos reajustes e intereses que procedieren.
- VI. Que, se ordena a la demandada a pagar las cotizaciones de seguridad social a enterar en A.F.P. Provida, Fonasa y AFC Chile S.A., adeudadas por el periodo de 26 de enero de 2011 y su término el 31 de diciembre de 2020, en razón de \$391.668 pesos



brutos debiendo notificárseles a dichas instituciones el fallo –una vez ejecutoriado– por carta certificada, a fin de que procedan conforme a lo dispuesto en el artículo 461 del Código del Trabajo.

VII. Que, cada parte pagará sus costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad. Notifíquese la sentencia dictada precedentemente a las partes por este acto.

RIT: T-17-2021

RUC: 21- 4-0374439-2

Pronunciada por don **Emil Andrés Ibarra Sáez**, Juez Suplente del 2º Juzgado de Letras de Buin.

En Buin a dieciocho de abril de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución precedente.



A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>